

Capítulo 12

De la efervescencia a la madurez política: lo viejo y lo nuevo en el movimiento social haitiano después de 1986

Sabine Manigat

Resumen

El movimiento social haitiano de las últimas décadas está marcado por avances y retrocesos políticos, así como por el paulatino retorno y afianzamiento del sistema oligárquico contra el que se viene luchando desde la década del 80. Luego del surgimiento de un potente movimiento social con demandas múltiples y un afán por “cambiar el Estado”, que incluso alcanza el poder a fines de 1990, un golpe militar que derroca a Jean Bertrand Aristide, figura emblemática del movimiento, a ocho meses después de su instalación, significó otro retroceso histórico. El movimiento social sigue luego un recorrido tortuoso, de la resistencia al golpe que lo diezmó a la atomización, pasando por la recuperación e instrumentalización de parte de sus componentes como pandillas delincuenciales. Pero a raíz del terremoto del 2010 empieza a delinearse nuevamente una incipiente movilización, más bien motivada por solidaridades de base para con los damnificados. Y en ocasión de las elecciones celebradas en 2016, se produce un despertar social y político que ha desembocado en la crisis total que hoy vive el país. Este trabajo propone un recorrido por los diferentes momentos de la movilización social y política de Haití, desde mediados de los 80 hasta la actualidad, para contribuir a la comprensión del pasado reciente, pero sobre todo el presente y las perspectivas a futuro.

Palabras clave: Movimiento social; ciudadanía; gobernabilidad; Estado; movilización social.

Citar como:

Manigat, S. (2023). De la efervescencia a la madurez política: Lo viejo y lo nuevo en el movimiento social haitiano después de 1986. En F. Parra y M. Cristeche. (Eds.). *Desigualdades, resistencias y derechos en Latinoamérica y el Caribe* (pp. 298-321) Religación Press. <http://doi.org/10.46652/religacionpress.22.c42>



Introducción

Está enraizada en la opinión pública una percepción del movimiento social haitiano asociada a determinadas imágenes (quema de llantas, jóvenes enmascarados y a menudo armados...). La prensa internacional, las redes sociales, difunden dicha percepción desde hace más de diez años –desde el terremoto de enero del 2010– dibujando una Haití caótica, violenta y sobre todo disfuncional; es decir, un Estado fallido del que es necesario que la “comunidad internacional” se haga cargo.

Por un lado, esta percepción habla de una realidad. Desde el golpe de Estado contra el presidente Jean Bertrand Aristide, que destruyera la primera experiencia democrática posterior a la caída de la dictadura duvalierista en 1986, Haití ha sufrido un retroceso político y social continuo, marcado por el paulatino retorno y afianzamiento del sistema oligárquico-duvalierista que se pretendía derrocar en 1986. Por otro lado, dicha percepción también oculta aspectos importantes del movimiento social haitiano que se despliega en esos años, y de su evolución. Al focalizarse exclusivamente en lo espectacular y en lo más dramático de la situación del país, induce a una lectura distorsionada de la dinámica política haitiana de estos últimos treinta y cinco años. En efecto, ni el discurso ni las imágenes relacionadas con Haití han cambiado, mientras que profundas mutaciones han ocurrido entre los actores y en las modalidades de las movilizaciones. Además, la imprenta de las múltiples intervenciones extranjeras no aparece, lo cual refuerza la idea de un país condenado y de un pueblo incapaz, que se van solos a la catástrofe.

Al examinar más de cerca la evolución de los conflictos políticos y sociales en Haití durante el período, aparecen claramente en los últimos veinte años elementos nuevos que marcan el camino desde una ola reivindicativa que quiso, durante los años ochenta y noventa, conquistar el Estado mismo, se estrelló contra un edificio oligárquico represivo aún intacto, para luego renacer en un movimiento ciudadano que hoy es capaz de plantear y de reclamar la existencia de un Estado proveedor de servicios y respetuoso de las libertades y los derechos.

Un movimiento social nace venciendo a la dictadura

Se entiende aquí, pragmáticamente, que el concepto de movimiento social remite a dinámicas colectivas con inspiración y/o contenido social, que expresan los intereses y las ideologías dentro del cuerpo social en momentos determinados. Se entiende asimismo que, más allá de las particulares expresiones que puede asumir una fracción o una fase de un movimiento social determinado, éste entraña demandas y/o proyectos que *dicen* las fuerzas sociales y, por ende, las clases sociales que le dan vida y sentido.

En Haití, el movimiento social acarrea una herencia histórica de populismo y de clientelismo, pero también una tradición de representación de los excluidos contra “los de arriba”, que hacen a su perfil a menudo radical y siempre de amenaza directa contra el orden vigente (Hector, 2006). Por lo general no ha conllevado una propuesta de convocación nacional sino más bien una perspectiva ante todo opositora salvo, en cierta medida, bajo la primera ocupación norteamericana (1915-1934) cuando los componentes nacionalista y antiimperialista se juntaron, a pesar de la tradicional polarización social. Empero, con la caída de la dictadura duvalierista el 7 de febrero de 1986, tras veintinueve años, surge una constelación de organizaciones y asociaciones cívicas que conforman pronto un movimiento reivindicativo potente, socialmente diverso, que ha sido considerado como la fuerza motora del cambio político en el país.

Este movimiento surge en un contexto internacional marcado por una ola de transiciones políticas post dictadura. En países como Chile, Brasil, Uruguay, estas transiciones son manejadas por cúpulas políticas detentoras de cierta legitimidad popular y de cuotas de poder que las habilitan a negociar con las dictaduras el traspaso ordenado a un Estado de derecho. Dichos procesos fueron conocidos como transiciones democráticas (Hermet, 1992). En el caso de Haití, una serie de rasgos específicos definen la salida de la dictadura de los Duvalier. Al contrario

de lo que ocurre en la misma época en esos países latinoamericanos, las fuerzas políticas que vuelven del exilio a Haití están muy debilitadas. Ha habido, sobre todo en el exilio a principios de los ochentas, acercamientos esporádicos entre partidos de diferentes ideologías y un intento por converger en un frente común contra la dictadura, pero de ello nada concreto resultó (Manigat, 1990). La salida del dictador Jean Claude Duvalier el 7 de febrero de 1986 es orquestada por los Estados Unidos y controlada por un Consejo Nacional de Gobierno–CNG–dominado por el ejército y encargado de encaminar al país hacia un régimen de Estado de derecho. Así, no se entabla ningún proceso de negociación política entre las partes -los partidos, casi todos de la oposición-, y el Consejo Nacional de gobierno, para manejar la transición.

El poder cívico-militar choca inmediatamente con los intereses y los actores de ese vigoroso movimiento, social y profesionalmente multifacético, que copa rápidamente el espacio reivindicativo y político. Sus demandas conciernen a todos los derechos básicos y ciudadanos ignorados por la dictadura, los cuales quedan resumidos en el lema “*Changer l’État*”- cambiar el Estado. Conocido como “movimiento democrático”, el MD tiene un liderazgo abigarrado y disperso. En tanto expresión de las aspiraciones antidictatoriales, es mayoritario en ese momento, pero huérfano de una conducción política capaz de negociar sus intereses frente a sectores dominantes allegados a la dictadura (Hector, 1991), aunque desde 1976 habían empezado a empujar hacia cierta liberalización de la economía. La definición misma del carácter de la transición política da lugar a enfrentamientos fuertes y a veces sangrientos, por ejemplo, en pro o en contra de la privatización de las empresas públicas, a favor o contra una cohabitación con el gobierno de turno, claramente duvalierista.

En términos organizacionales, a grandes rasgos el MD incluye tres componentes: una gama diversa de asociaciones recién creadas de clase media radicalizada, grupos de jóvenes de barrios populares, a menudo inspirados por la corriente teología de la liberación, y sindicatos, tanto

del sector público como privado. Las asociaciones cívicas de profesionales e intelectuales de la clase media habían empezado a surgir poco a poco, bajo el mantel de la llamada *liberalización*, proclamada hacia 1976 por Jean Claude Duvalier hijo, sucesor heredero del dictador François Duvalier. En efecto, la política de promoción de los derechos humanos de la administración del presidente estadounidense James Carter, entre 1976 y 1980, tuvo, entre otras incidencias, la de propiciar veleidades liberales en la gestión de la dictadura duvalierista, muy dependiente de Estados Unidos. Ese periodo efímero terminó en noviembre de 1980 con una brutal represión de las asociaciones de derechos humanos y de la prensa no subordinada al régimen.

A partir de 1986 estas asociaciones se despliegan y encabezan la mayor parte del MD. Sus integrantes son educadores, profesores, abogados, cuadros profesionales del desarrollo, intelectuales y artistas... muchas veces formados en el extranjero y recién retornados. Difunden ideas progresistas y focalizan su acción en lo político y la cuestión de las elecciones y la toma del poder.

Un segundo grupo está conformado por jóvenes de clase media o popular influenciados por los *Ti Legliz* – iglesias pequeñas – vehículos de la teología de la liberación. Reagrupan jóvenes católicos, en particular estudiantes y campesinos, a veces empleados en asociaciones u ONG de desarrollo. La influencia de la Iglesia tanto dentro de la población como sobre el Estado había facilitado la transmisión de mensajes y la educación política de esos segmentos, más educados y mejor informados que el grueso de la población. El impacto del Concilio Vaticano II desde la década del setenta y luego la visita del Papa Juan Pablo II a Haití, en el año 1983, dieron lugar a una auténtica corriente católica crítica del duvalierismo, que cobra fuerza a la salida de la dictadura alrededor del padre Jean Bertrand Aristide, un joven sacerdote radical, activo y muy popular en los barrios desfavorecidos de Puerto Príncipe.

Al lado de esos grupos, los comités de barrio surgen como una forma “espontánea” de expresión, pero también de protección de su territorio, en un contexto de creciente conflictividad con el CNG y los duvalieristas. Nacen a menudo dentro de barrios populares, a iniciativa de jóvenes preocupados por la seguridad. Suele darse el caso de que varios barrios se junten para formar una organización. El espacio público se convierte así en disputa política de los protagonistas. De allí nacen las llamadas *organizaciones populares*. Muy poco estudiadas (Smarth, 1998), con perfiles diversos según el espacio y la época, se distinguen por su desconfianza instintiva hacia el Estado y hacia las instituciones en general. Ostentan formas y niveles organizacionales muy fluidos, incipientes, con poca jerarquía.

El tercer gran componente del MD es el de los sindicatos. Presenta estructuras relativamente consistentes comparadas con los *Ti Legliz* o las organizaciones populares. Los más importantes resultan ser los sindicatos de las empresas públicas (cemento, aceite, harina) y de las maquiladoras. Lo que se debate en su seno concierne directamente al rumbo que debe tomar la economía nacional. Los dos primeros años que suceden a la caída de la dictadura son de intensas discusiones, dentro y fuera de las empresas. Sin descuidar sus demandas salariales los trabajadores expresan posiciones de defensa de las empresas públicas y de la producción nacional en general.

Rápidamente el MD se dota de un estado mayor mixto, compuesto por algunos políticos, militantes sindicales y profesionales de izquierda. Esta dirigencia emite directivas y convocatorias, pero su proyecto no llega más allá de demandas generales como educación, salud y libertades individuales. Es cierto que, sin ser revolucionarias, esas demandas aparecen radicales ante un régimen muy similar a la dictadura que le precedió, es decir, totalmente indiferente a los derechos básicos de la población. Los métodos de acción del MD privilegian la ocupación de la calle (sit-in, manifestaciones, bloqueos de calles) pero también huelgas de hambre e incluso llamadas a la insurrección, como fue el caso duran-

te el verano del 1987, cuando un llamado a la huelga de los principales sindicatos se transforma en un movimiento para derrocar al CNG (Manigat, 2011).

Lo notorio es que los partidos políticos quedan a la zaga del movimiento social. La gran mayoría regresó al país tras un largo destierro impuesto por la represión duvalierista, cuando no han nacido en el exterior. Algunas pocas formaciones de izquierda se habían mantenido en la clandestinidad a lo largo de los años setenta, pero llegan muy debilitados al 7 de febrero de 1986. Y un par de partidos de ideología demócrata cristiana, formados apenas cinco o seis años atrás, intentan afianzarse. Por su pasado opositor y la represión que sufrieron bajo la dictadura, las organizaciones que se reclaman de la izquierda parecen tener la preferencia de muchos integrantes del MD. Anhelos y fantasmas, las ideas progresistas han permeado la opinión anti duvalierista, y preocupan al sector privado y a la oligarquía en general. Enfrentado a un gobierno en perfecta continuidad con la dictadura y falto de una conducción política habilitada a articular y a negociar sus demandas, el MD se lanza al asalto del poder por la vía electoral; una primera vez en noviembre del 1987 los comicios resultan una masacre de electores, y tras peripecias que no cabe exponer en este espacio, una segunda vez en diciembre del 1990. Finalmente, el 16 de diciembre de 1990, encabezando una coalición de asociaciones cívicas, Jean Bertrand Aristide gana las elecciones presidenciales por una abrumadora mayoría.

Ahora bien, la problemática de la representación/participación de los actores sociales y de sus intereses frente a un Estado cuestionado y objeto de demandas múltiples permea todo el debate político alrededor de esas elecciones. Los partidos y candidatos sólo tienen una legitimidad condicionada a los resultados que se esperan de ellos, ya que no tienen sino un débil arraigo organizacional dentro de la población. Aun teniendo, por medio de sus representantes, las riendas institucionales del poder, el movimiento social sigue disperso. Las organizaciones ciudadanas están parcialmente representadas dentro del parlamento y ejercen una

doble presión interna y externa sobre el gobierno de Jean Bertrand Aristide. Por su parte las llamadas organizaciones populares simbolizan la vigilancia popular contra el regreso del duvalierismo y la desconfianza de los excluidos hacia el Estado. Su base barrial se ensancha y desarrolla cierto nivel de articulación.

El gobierno *Lavalas* (“avalancha”, en alusión a la abrumadora victoria electoral de Aristide) descansa sobre estas fragmentadas bases y trata de formular un proyecto de gobierno que refleje las aspiraciones que lo llevaron al poder. Empero, con toda sus debilidades e improvisaciones, el movimiento social haitiano adquiere en esos meses una notoriedad real, llegando a representar para algunos estudiosos una ilustración de los “nuevos movimientos sociales”. La efervescencia que rodeó la experiencia de Aristide resultó sin embargo tan efímera como lo fue su presidencia. En efecto, tan sólo ocho meses después de su elección, un golpe de Estado pone un fin sangriento al gobierno de Lavalas. La resistencia popular duró tres días, con un saldo de cientos de muertos a mano de los militares (Danroc y Roussiere, 1995).

El golpe militar del 30 de septiembre de 1991 señala la derrota del movimiento social. Este espacio no permite tratar el tema, pero cabe señalar la responsabilidad de los partidos en el desarrollo y el desenlace de esta experiencia. De hecho, en las movilizaciones, en la elección de los candidatos, y hasta para la candidatura de Aristide, los partidos de izquierda ejercieron una influencia decisiva pero siempre como acechando, escondidos detrás del movimiento social. Es una coalición de organizaciones de la sociedad civil, el Frente Nacional para el Cambio y la Democracia – FNCD, que lleva a Aristide al poder. Sin embargo, los partidos que fueron arquitectos tanto del FNCD como de la victoria de Aristide nada sustancial hicieron para que este organice y sepa negociar el poder con las potentes fuerzas reaccionarias que lo enfrentaron y lo derrocaron en pocos meses (Jean et al, 1999).

Empieza entonces un tortuoso proceso marcado primero por el golpe militar, seguido por una sucesión de gobiernos condicionados por la anuencia, o más directamente las imposiciones, de los Estados Unidos. El sistema político haitiano permanece inmune a las reglas de la transición democrática, pero recupera e instrumentaliza el ejercicio electoral, que se ha constituido en el camino ineludible hacia el poder. Paralelamente y en respuesta a esa recuperación del campo electoral, una dinámica anti organizacional, anti intelectual incluso, se desarrolla dentro de ciertos sectores que se reclaman de la izquierda y se impone más generalmente en la política, obstaculizando cualquier articulación y cualquier intercambio serio con las nuevas corrientes emergentes en la región. Por lo tanto, Haití no conecta con la dinámica que nutre la “izquierda del siglo XXI”. La indiferencia de la gran mayoría de los partidos y regímenes de izquierda en los países que proporcionarán tropas y personal para la misión de la ONU en 2004 (la Misión de las naciones unidas para la estabilización de Haití, MINUSTAH) es un indicio de ello.

Una larga travesía por el desierto antes de renacer

Tras tres años de exilio en Estados Unidos, Aristide es reinstalado en el poder en octubre de 1994, reclamando en vano la “recuperación” de esos tres años. Pero en 2000 logra rehacerse de la presidencia en elecciones muy cuestionadas (Manigat, 2001). Alienta o tolera la proliferación de grupos gansteriles, lo cual deteriora rápidamente su popularidad hasta su exilio forzado en febrero de 2004, que da paso a la Minustah. Siguen diez años de instrumentalización y de desnaturalización, cuando no de marginación del movimiento social. En efecto, la recuperación por Aristide del ala popular del movimiento social para fines revanchistas había derivado en un proceso de *gansterizacion* de múltiples grupos convertidos en verdaderas tropas de choque del régimen. Conocidas como *chimè* y agrupadas en pequeñas células denominadas *tifanmi*, esos grupos han sido señalados como responsables de innumerables actos terroristas, entre los cuales se pueden mencionar: los ataques a candidatos

electorales en el 2000; el saqueo e incendio de locales y residencias de dirigentes políticos de oposición en diciembre 2001; la destrucción de todas las antenas de radio telecomunicación en diciembre del 2002; y el lanzamiento de la campaña de terror, con secuestros y asesinatos anónimos, autodenominada por sus hechores *Operación Bagdad*, tras el golpe de estado y derrocamiento de Aristide en febrero del 2004. El carácter nítidamente político de esos hechos quedó claro con su rápida puesta bajo control por las tropas onusianas una vez tomada la decisión política en el verano de 2007.

La breve reactivación de una movilización encabezada por jóvenes profesionales y universitarios –el *GNB*, luego grupo de los “184”– logra congregarse dentro de la sociedad civil una fuerza opuesta a las derivas de Aristide y constituye el antecedente directo de su segundo derrocamiento en febrero del 2004. Pero todo terminaría en confusión política y compromisos que afectan por casi una generación la legitimidad que el movimiento social haitiano había adquirido desde su resurgimiento en 1986. Los movimientos de protesta y las manifestaciones callejeras aparentemente sin norte y con improbable liderazgo suscitan en adelante una suerte de desconfianza inmediata y tenaz.

Empero, el largo paréntesis que se extiende de 2004 a 2016 está marcado por dos eventos que van a influir sobre el renacimiento del movimiento social: el terremoto de enero de 2010 y las truncadas elecciones de 2015. En vísperas del terremoto del 12 de enero de 2010, la coyuntura marcada por la proximidad de las elecciones legislativas propicia una vitalidad renovada de las organizaciones llamadas de la sociedad civil: mujeres, derechos humanos, asociaciones barriales o regionales, todas entran de nuevo a implicarse o a posicionarse en política. Es que cada coyuntura de crisis social, humanitaria o política despierta de momento impulsos políticos que polarizan y a veces reorientan incluso el movimiento social.

Vuelve a sobresalir entonces el problema nodal de las mediaciones y más específicamente, el del aislamiento de los trabajadores. El caso emblemático al respecto es sin duda el de la batalla por el salario mínimo durante el verano de 2009. Precedido por el eslogan del primero de mayo: *Patrones y obreros juntos para el desarrollo*, ese debate evidenció las dimensiones del control ejercido por el sector privado sobre toda la vida económica del país y, en especial, sobre las condiciones de trabajo y de reproducción de los trabajadores. Fijado en 70 gourdes (1.80 dólares estadounidenses) desde 2003, el salario mínimo tendría que haber sido revisado, por ley, cada año en función del costo de la vida. A la hora de modificarlo en el verano de 2009, las discusiones y los debates, ampliamente dominados por los intereses privados y bajo la amenaza siempre latente de un *lock out* patronal nunca contaron con un protagonismo fuerte de los sindicatos.¹ El debate fue ante todo parlamentario y de prensa y las pocas manifestaciones obreras durante el mes de julio fueron enseguida calificadas de *violentas* y no recibieron la simpatía de la opinión pública.

El terremoto de magnitud 7.3 en la escala de Richter que golpeó Haití el 12 de enero de 2010 afecta significativamente a regiones y ciudades particularmente pobladas, y activas socialmente. Resulta parcialmente destruida la región capitalina, donde está concentrada la mayor cantidad de gente – alrededor de dos millones. Dentro de Puerto Príncipe, los barrios populares más densamente poblados -Bel Air que colinda con el palacio nacional, y Carrefour Feuille al sureste de la capital- son muy afectados, y son, curiosamente, los barrios con mayor tradición de movilización social. Esta primera circunstancia, de coincidencia entre niveles de destrucción y tradición previa de movilización social de los barrios, favorece al menos dos fenómenos: por un lado, la toma y ocu-

1 Los empresarios, en especial del sector de reexportación, argumentaron que de fijarse el nuevo salario mínimo a 200 gourdes (5 dólares) *tendrían que cerrar sus fábricas*, además de advertir que el capital extranjero que debe ayudar al crecimiento y la creación de empleos se orientaría hacia países más baratos.

pación de los principales espacios públicos más importantes de la región capitalina, y particularmente el *Champs-de-Mars* frente al palacio nacional; por otro, la temprana y sólida organización de los sitios de refugiados en comités de gestión que recuerdan sin duda los comités de barrios o de vigilancia de los años ochenta y noventa. Nacen verdaderos campamentos de fortuna con sus comités responsables de la recepción y distribución de la ayuda, la limpieza y la seguridad.

Esas circunstancias contribuyen a un principio de revitalización del movimiento social, algo que las instituciones internacionales que intervinieron en el momento captaron a su manera cuando, una semana después del terremoto y ante los persistentes rumores de “riesgo” de caos, impotencia, desorden y brotes de epidemia, la ONU tuvo que reconocer, por la voz de la responsable de asuntos humanitarios y también por la de la Cruz Roja internacional, que el pueblo haitiano había dado muestras de un sentido de organización tal que la mayoría de las vidas habían sido salvadas por la movilización nacional, antes de la intervención internacional. Pero hay que reconocer que estos brotes organizativos, motivados por la sobrevivencia y un sentido comunitario anclado en la cultura del país, no desembocaron en avances organizativos duraderos.

El segundo evento de relevancia, antes del renacimiento del movimiento social en 2018, son las truncadas elecciones de noviembre de 2015, que a su vez fueron precedidas por los comicios de 2010-2011. En efecto, es entre el seísmo del año 2010 y la instalación del gobierno salido de los comicios de 2011, cuando se despliega la tutela internacional que pone a Haití bajo un control externo sin disfraz. Este control está ejercido por el llamado *Core Group*, una especie de sindicato diplomático conformado por los embajadores de Alemania, Brasil, Canadá, España, Estados Unidos, Francia, de la Unión Europea, además de los Representantes especiales de la OEA y del Secretario General de la Naciones Unidas. La tutela empieza con la confiscación del manejo de la ayuda por los Estados Unidos y muy particularmente la pareja Clinton vía la Comisión Internacional para la Reconstrucción de Haití (CIRH). Se afianza con la

total anexión de las elecciones impuestas a un país exangüe a finales del año 2010 -anexión evidenciada por la “corrección” de los resultados de la primera vuelta por parte de la OEA y la “modificación” de los de la segunda vuelta (Seitenfus, 2015).

El régimen neodualierista personificado por el presidente nombrado Michel Martelly y su partido, el PHTK², es el fruto de todas estas manipulaciones e imposiciones. Su proyecto es “vender” Haití al capital extranjero (“*Haiti is open for business*” fue el lema del equipo gubernamental desde el 2011), beneficiándose primero, por supuesto, lo que hizo rápidamente del régimen PHTK el más corrupto de la historia reciente del país.

Es al final de la primera presidencia PHTK, en febrero del 2015, cuando suena la “segunda llamada” en el nuevo despertar del movimiento social haitiano, a propósito de las truncadas elecciones generales del 2015. Para contrarrestar el intento de Martelly por imponer a un desconocido allegado suyo, Jovenel Moise, como presidente, una coalición de partidos y de organizaciones populares se subleva y en medio de contiendas y de alianzas efímeras, logra detener la elección presidencial durante la segunda vuelta.

La mayor parte del año 2016 es dominada por el tire y afloje entre una multiforme oposición al régimen PHTK y el equipo Martelly/Moise. El PHTK se hace finalmente del poder en unos comicios que registran menos del 20 por ciento de participación de un electorado de más de 7 millones. Jovenel Moise es electo con 500,000 votos. Estas elecciones marcan el inicio de la crisis total que lleva al ocaso del Estado haitiano hoy. En efecto, desde 2011 el advenimiento del neo-duvalierismo con el PHTK desencadenó de inmediato dos procesos: La liquidación de la economía nacional y la destrucción del Estado.

Para ser breve, en poco más de 15 años una corrupción desenfrenada, aunada a una estrategia de reparto de territorios económicos (aduanas, mercado de divisas, seguros, etc.) entre la oligarquía y la clase política, ha convertido el país en una jungla, económica y políticamente. En estas condiciones, desde el inicio de la presidencia de Jovenel Moise el mantenimiento de PHTK en el poder resulta improbable; la crisis que estalló en julio del 2018 es la chispa que prende el fuego.

Metamorfosis y afirmación de un movimiento ciudadano

Tras unos diez años de hibernación, que por cierto tuvieron consecuencias sobre la definición y los posicionamientos de los actores, el movimiento social resurge con renovado vigor. De hecho, si bien es cierto que los disturbios que estallaron en prácticamente todo el país en julio de 2018 son causados por el anuncio del aumento en el precio de los hidrocarburos y también por el alto costo de la vida (la inflación registró récords entre abril y junio de 2018, y la moneda nacional inició su debacle) el impulso a la ampliación de la movilización proviene desde el plano político. Si bien parece ceder ante la presión popular, el gobierno de turno se encierra rápidamente en un mutismo y una perfecta indiferencia ante el auge de las demandas y de la movilización. Esta cerrazón es leída como una provocación. Y es que el presidente Jovenel Moise ha ejercido una gestión cada vez más personal del gobierno, mostrándose incapaz, después de dos años y medio en el poder, de concretar promesas electorales relativas a los servicios básicos (agua, electricidad), o de contener el desplome de la economía (pérdida de empleos, asfixia del sector agrícola, descontrol de la tasa de cambio). Además, ignora las reivindicaciones de la oposición y sabotea a su propio equipo al negar toda iniciativa a los sucesivos Primer ministros que nombra (cuatro en 18 meses).

En respuesta, las demandas del movimiento popular pasan rápidamente de ser demandas económicas a políticas. A finales del 2019 el reclamo es ya la renuncia del presidente. Mientras, como en eco a la

represión policiaca, crece la inseguridad con la expansión de pandillas armadas en distintos barrios de la capital. El movimiento insurreccional del 2018-2019 aparece como una extensión directa del de 2015 y el (re)surgimiento de un movimiento ciudadano. Pero este resurgimiento ostenta actores nuevos en muchos aspectos, en sus acciones y en sus territorios.

Lo viejo y lo nuevo se mezclan en el escenario político actual de los movimientos sociales en Haití. Sigue imperando lo viejo, en las modalidades insurreccionales de protestas, la fluidez del liderazgo popular, la débil cultura de la negociación. En efecto, por un lado, la herencia del movimiento popular de 1986-2000 está muy presente, al menos en dos niveles: el territorial y el estilo protestatario. En lo territorial, se ha afirmado la preponderancia de los barrios urbanos populares. Entre el crecimiento demográfico y el avance descontrolado y anárquico de las ciudades, los sectores populares urbanos se han consolidado como actores políticos ineludibles.

En esta evolución se destacan dos hechos notorios. Primero, hay una reconfiguración y reasignación de los espacios de la protesta social. Los barrios ya no actúan de modo indiferenciado, han adquirido una personalidad propia; esta nueva territorialidad no es exenta de problemas en la medida en que puede llegar a aislar a determinado barrio; pero sobre todo porque dicho aislamiento suele favorecer la implantación de delincuentes armados, como quedó demostrado desde el 2021 en Puerto Príncipe. Segundo, los grupos económicos de poder han extendido considerablemente su influencia dentro de esos sectores y barrios populares. Formaciones mafiosas controlan diversos barrios y mercados urbanos en beneficio de personalidades del sector privado que las pagan. En varias oportunidades, declaraciones abiertas en la prensa, ya sea de delincuentes protegidos, ya sea de sus padrinos, documentan estos vínculos de tipo mafioso. Se desatan verdaderas guerras por territorios durante más de un año, hasta que una parte importante de esta delincuencia armada se federe en el 2020 con la denominación de *G9 an fanmi*. A

comienzos de septiembre de ese año un portavoz de la Comisión Nacional de Desmovilización, Desarme y Reinserción (CNDDR) confiesa que la Comisión alentó la federación de las pandillas para “facilitar la negociación entre el *G9 an fanmi* y la CNDDR (...) y poder establecer un ‘diálogo’”. Así queda evidenciada la colusión entre el poder político y las bandas armadas. Estos grupos también se utilizan para “animar” y atacar las manifestaciones, más allá de que varias organizaciones populares persisten, mantienen su autonomía y se insertan en organizaciones cívicas y políticas.

Otra constante desde la caída de los Duvalier en materia de movilizaciones por demandas son los servicios básicos. Las demandas son persistentes y están incluso en el origen de la reactivación de un sector sindical cada vez mejor estructurado. El empeoramiento de la situación económica, especialmente tras el terremoto de 2010, ha dado lugar a numerosas demandas de salarios y mejores condiciones laborales. Al lado de los sindicatos, movilizadas desde el verano de 2018 y muy involucradas en las negociaciones políticas desde 2019, los empleados de diversas administraciones y empresas públicas y los docentes reivindican también con manifestaciones y huelgas frente a un Estado en plena decadencia.

Empero, nuevos problemas motivan las movilizaciones populares y en primer lugar el de la corrupción. Estudiantes, ejecutivos y profesionales retoman este tema y lanzan a principios de 2020 un movimiento: los *petrochallengers*, en referencia al despilfarro del multimillonario préstamo en hidrocarburos otorgado a Haití por la Venezuela bolivariana. Desde el otoño de 2018 reúne a amplios sectores de las capas medias, encarnando el auge de la ciudadanía organizada, con una variada gama de objetivos (Thomas, 2019). Esta atmósfera recuerda por momentos los años ochenta y noventa, pero con una diferencia esencial: el Estado se ha convertido, de un regulador de la sociedad y de la nación en un adversario político férreo confrontado a la nación (Trouillot, 1990), con intereses particulares ligados exclusivamente al proyecto PHTK. El interlocu-

tor ha cambiado de papel, hasta de naturaleza. La gravedad del peligro representado por el PHTK está sin duda en el origen de una toma de conciencia por parte de la sociedad civil del papel que debe desempeñar, en aras de lograr la ruptura, el “cambio de sistema” necesario. A raíz de esta toma de conciencia surge un “nuevo movimiento social, ciudadano, maduro, abierto y determinado a ser actor, en adelante, de la suerte de su país. Es que la sociedad civil se ha diversificado y ha madurado. A partir de la instalación de la Misión onusiana – la Minustah — en el 2004, las organizaciones de derechos humanos se han desarrollado y constituyen un “sector” delimitado, un actor político por derecho propio.

Luego, las experiencias de 2019-2020 consolidan y articulan este nuevo movimiento social. Hay una clara evolución entre los principales actores. Así, las fronteras entre partidos y organizaciones cívicas son más claras; un efecto -tal vez inesperado- del creciente descrédito de los partidos ante la población, tras la repetición de ejercicios electorales fraudulentos. Esta delimitación se evidencia durante las negociaciones políticas de noviembre de 2019 y de marzo-abril de 2021, entabladas entre Jovenel Moise y su gobierno por un lado y una coalición cívico-política por otro, para lograr un cambio de rumbo en la gobernanza del país. El fracaso del liderazgo político en esas dos oportunidades lleva a las organizaciones cívicas a organizarse como un actor político *per se*, como Coalición de Asociaciones de la Sociedad Civil (CASC).

Después de un año de paciente y compleja construcción de consensos y de acuerdos, unas mil organizaciones y personalidades firman el Acuerdo del 30 de agosto de 2021, conocido como *Acuerdo Montana*, que propone una alternativa nacional para una transición de ruptura, a partir de la celebración de una Conferencia Nacional Soberana para reconstruir el Estado de derecho y la legitimidad constitucional y electoral de sus dirigentes. Esta propuesta ciudadana de una transición de ruptura está en debate hoy. Además, a medida que se extiende el sentimiento ciudadano, y precisamente cuando todos los espacios electorales se cierran, se expresa con mayor fuerza en la población la reivindicación por escoger soberana y democráticamente a los responsables y los dirigentes del país.

Last but not least, en toda esta evolución del movimiento social se ha logrado la inclusión formal del sector popular organizado como parte integrante del Acuerdo Montana, y su participación real como actor con representantes propios. De este modo la tradicional dicotomía: “pueblo versus ricos”, que tanto ha marcado la historia social y política de Haití, aparece hoy atenuada o relativizada, si bien no superada.

Por cierto, es menester subrayar la originalidad de la *propuesta Montana*, pero su importancia reside sobre todo en su carácter audaz. Montana trata de superar el debate acerca de la legalidad o de la legitimidad de la acción política ciudadana. En la situación inédita de Haití en materia de gobernanza democrática y de legalidad constitucional, la ciudadanía proclama su derecho a redefinir para sí las maltrechas reglas de la gobernabilidad clásica.

Por el renovado protagonismo que ha vuelto a ostentar, y por el significado de dicho protagonismo, hay que volver a examinar el movimiento sindical. Si bien es parte del proceso más general del movimiento social, su papel desde 1986 refleja la evolución del hecho organizacional. Desde 2018, cuando estalló la crisis que se ha ido profundizando y perdura hasta hoy, el movimiento sindical haitiano ha adquirido una importancia creciente. Su combatividad se remonta a los años 1976-1980 cuando los obreros, en particular los del sector público, representaron los primeros sectores organizados frente a la dictadura de los Duvalier. En la misma época empiezan las instalaciones de empresas maquiladoras en el área metropolitana. El movimiento se reafirma a lo largo de los años ochenta y noventa con la estructuración y el ensanchamiento de las organizaciones que en adelante abarcan las del sector privado y en particular el de las industrias de reexportación -las maquiladoras. Ante todo, los sindicatos han sido de todas las batallas: contra los gobiernos militares que tomaron el relevo del duvalierismo; contra las derivas del movimiento Lavalas (de Aristide), contra la arbitrariedad y la corrupción de los gobiernos recientes del partido neodualierista PHTK.

Se trata, por cierto, de un sindicalismo joven para los estándares de nuestra región, muy diverso, políticamente dividido y falto a menudo de un liderazgo popular en una sociedad en donde la regla es más bien el desempleo. Pero su fortalecimiento participa del despertar social que se inicia con el régimen PHTK y representa su componente más pujante. Las organizaciones sindicales no sólo se han involucrado plenamente dentro del movimiento social que desemboca en el Acuerdo Montana, sino que se han robustecido en el plano gremial y expresan hoy claramente su autonomía con las manifestaciones de febrero del 2022 convocadas por los sindicatos de las empresas de reexportación.

En un contexto de creciente represión y terror, en donde las ejecuciones y los secuestros son noticia diaria, cientos de obreras y obreros salieron a manifestar el miércoles 9 de febrero del 2022: contra un salario mínimo indecente bloqueado desde 2019 a 500 gourdes/día (equivalente hoy a menos de 5 dólares), por mejores condiciones de trabajo y de vida, contra una inflación que superó los 24 por ciento en 2021; por el respeto de las leyes y convenciones que rigen las relaciones de trabajo.

La brutalidad policiaca indignó a la opinión pública y suscitó la respuesta de los manifestantes quienes erigieron barricadas al día siguiente y luego anunciaron la continuación de su movimiento. El Consejo Superior de los Salarios (CSS, consejo tripartito que comprende el Estado, el empresariado y los sindicatos) se limitó a anunciar el envío de un informe al gobierno para la convocatoria del consejo en vista de una revisión del salario mínimo. En cuanto al empresariado, reconoce la justeza del principio de una revisión (el salario mínimo no ha sido revisado desde 2019); sin embargo, advierte que el aumento debería ser “razonable”. De ahí la propuesta de un ajuste a 665 y luego a 770 gourdes (7 dólares, con una devaluación diaria de la Gourde...). Más aún, en una declaración tardía, pero no por ello menos significativa, el miércoles 17 de febrero el vicepresidente de la Asociación de Industrias de Haití (ADIH), que representa el sector patronal de las maquiladoras, formuló la posición de ese patronato. Con una mezcla de condescendencia y de

arrogancia, subraya los daños hechos a las instalaciones de las empresas durante las manifestaciones -lo que no consta ni está detallado- y menosprecia la gravedad de la situación al evocar que las circunstancias económicas son difíciles “para todos” (sic).

En respuesta, desde el 17 de febrero de 2022 decenas de miles de obreros y obreras salen a la calle casi diariamente y esas manifestaciones pacíficas son confrontadas con nuevas embestidas de la policía, esta vez con balas reales. Disparan contra los manifestantes y contra los periodistas testigos de la represión (uno de estos murió el 22 de febrero). La acción de la policía, el silencio gubernamental, la suficiencia del empresariado, todo apunta hacia una colusión de estas tres instituciones para seguir negando los derechos de los trabajadores, con el riesgo (¿o el cálculo?) de llevar la confrontación a una explosión social más aguda. Como oportunamente señalara Frédéric Thomas (2019): “es la arrogancia de esta ‘élite’, que ha malversado cientos de millones de dólares. Segura de su impunidad, esta camarilla en el poder ha seguido enriqueciéndose, multiplicando planes, estrategias y promesas. ¿Cómo no leer, en contrapunteo del espectáculo que da, su desprecio hacia el pueblo haitiano?”

La movilización de los obreros haitianos se produce precisamente en medio de una crisis nacional total que desde el 2018 ha ocasionado el colapso del Estado, de sus principales instituciones (incluida la policía) y de su legitimidad más elemental. Las protestas evidencian el carácter extremo de la explotación del trabajo en una economía oligárquico-monopolista cuyos resortes están quebrados. Se trata de un acontecimiento significativo que ha vuelto a poner a la orden del día la movilización obrera contra un régimen arbitrario y totalmente desprovisto de legalidad que controla el país.

Sombrías perspectivas para un movimiento ofensivo

Al momento de escribir estas páginas, prácticamente todos los sectores de la vida nacional de Haití están trastornados o francamente bloqueados, en particular las escuelas, las administraciones y las empresas públicas. La policía, dividida y politizada, se presenta como actor de pleno derecho en las movilizaciones. Los ataques son cometidos regularmente en barrios obreros por bandidos armados que operan con total impunidad. Las masacres perpetradas desde noviembre del 2018 en varios barrios populares -La Saline, Carrefour Feuille, Belair- han sido bien documentadas por varias organizaciones de defensa de los derechos humanos.

Desde agosto de 2020 se han multiplicado los asesinatos. Algunos tienen visos claros como el del presidente del Colegio de Abogados de Port-au-Prince, que tuvo eco internacional. Los jueces y abogados no sumisos reciben amenazas de muerte; los medios son atacados por individuos no identificados. El terror cunde en los barrios populares de la capital. El asesinato del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio del 2021 ha puesto al desnudo ante el mundo hasta qué punto el poder parece haber perdido el control del país y navega sin brújula (Thomas, 2021). El sucesor de Moïse ha sido nombrado por el Core Group con un dedazo –un tweet, literalmente–, y mientras sigue profundizando la inseguridad, la debacle de la economía y el colapso del estado, se empeña con dos obsesiones: cambiar la Constitución y organizar elecciones.

Tal es el contexto en que se inscribe la iniciativa ciudadana conocida como el Acuerdo Montana. Un movimiento ciudadano realista pero decidido se propone definir y controlar –mas no llevar a cabo, ya que es consciente que su papel es vigilar, no gobernar– una transición hacia el restablecimiento del Estado de derecho. El recorrido ha sido largo desde el 2018 y por supuesto no hay unanimidad alrededor de Montana. Además, afianzar los vehículos de la participación y extenderla, entender la gestión de lo político para ejercer plenamente su derecho a controlar,

negociar, por lo pronto, con el poder de turno, esta necesaria transición... La tarea de Montana es todavía inmensa, atrevida y ciertamente no inmune a los reveses. Pero es una propuesta que representa el más alto nivel de consenso ciudadano alcanzado en el país desde hace más de treinta y cinco años. Y llega en el momento crítico en que ninguna disposición legal o constitucional, ninguna jurisprudencia o experiencia previa, puede indicar una salida a esta crisis total. Sólo la legitimidad del pueblo puede ser invocada (Migdal, 1988) y Montana la tiene sin duda, hasta el punto de que los poderosos, nacionales o extranjeros, se refieren a esta propuesta como la alternativa a promover, a convencer, a combatir.

Dicho esto, dada la incapacidad de las fuerzas nacionales para encontrar una solución endógena, Haití enfrenta el peligro de otra imposición extranjera. Un contexto similar precedió al despliegue de la Minustah en 2004: desacuerdos políticos, inseguridad, proliferación de “rebeldes” armados. Pero hoy se trata de la captura del Estado en todos sus componentes y la actual misión política de la ONU, que está en el país para remediar a su “mala gobernanza”, ha contribuido activamente -por decir lo menos- a esta situación: ha apoyado explícitamente los planes de la presidencia, luego los del actual Primer ministro de facto, como consta en sus informes sucesivos al Secretario General de la ONU.

Hoy la “comunidad internacional” expresa preocupación por el “peligro regional” que representaría Haití, mientras aguarda un “consenso entre los haitianos”, consenso que sabe perfectamente es imposible sin una señal de su parte hacia su protegido en el poder. El escenario está montado para una especie de tutela internacional mientras el movimiento social haitiano clama con fuerza que su combate es por la recuperación de la soberanía nacional.

Referencias

- Danroc, G., & Roussiere, D. (1995). *La répression quotidienne en Haïti (1991-1994)*. Karthala
- Hector, C. (1991). *Une quête du politique. Essais sur Haïti*. CIDHICA
- Hector, M. (2006). *Crises et Mouvements Populaires en Haïti*. CIDIHCA
- Hermet, G. (1992) *Les désenchantements de la liberté – la sortie des dictatures dans les années 90*, Fayard.
- Jean, J.C., & Maeschalck, M. (1999) *Transition politique en Haïti: radiographie du pouvoir Lavalas*. L'Harmattan
- Manigat, S. (1990). *Les partis politiques*. Crespip
- Manigat, S. & Moise, C. (2001). Haïti 2000: Lavalas en el poder, Lavalas en cuestión. *Anuario Social y Político de América Latina y el Caribe*. 45-52
- Migdal, J. (1988). *Strong Societies and Weak States, State Society Relations and State Capabilities in the Third World*. Princeton University Press.
- Smarth, L. (1998). *Les Organisations Populaires en Haïti. Une Étude Exploratoire de la Zone Métropolitaine*. CIDHICA
- Seitenfus, R. (2015). *L'échec de l'aide internationale à Haïti Dilemmes et égarements*. CIDHICA/Université d'Etat d'Haïti.
- Thomas, F. (2019, marzo 15). Haïti: le scandale du siècle. Corruption, néolibéralisme et révolte populaire. Réseau Comité Pour l'abolition des Dettes Illégitimes CADTM international.
- Thomas, F. (2021, septiembre 1). La terreur s'installe avec la complicité de l'international. CETRI-Tribune
- Thomas, F. (2021, juillet 16). Haïti: l'assassinat du président «est le marqueur de la privatisation de toutes les institutions publiques. BASTA – International.
- Trouillot, M. (1990). *State against nation*. New York University Press.

From effervescence to political maturity: The old and the new in the Haitian social movement after 1986

Sabine Manigat

Université Quisqueya, Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, sección Relaciones internacionales, Puerto Príncipe, Haití
sabine.manigat@gmail.com

Abstract

Over the last decades, the Haitian social movement has been marked by political advances and setbacks, as well as by the gradual return and consolidation of the oligarchic system against which the country has been fighting since the 1980s. After the emergence of a powerful social movement with multiple demands and a desire to “change the state”, which even came to power at the end of 1990, the military coup that overthrew Jean Bertrand Aristide, an emblematic figure of the movement, meant a historic setback. The social movement then followed a tortuous path, from resistance to the coup that decimated it, to atomisation, through the recovery and instrumentalisation of some of its components as criminal gangs. But following the 2010 earthquake, an incipient mobilization began to take shape again, motivated more by grassroots solidarity with the victims. And on the occasion of the 2016 elections, there was a social and political awakening that led to the total crisis that the country is experiencing today. This paper offers an overview of the different moments of social and political mobilization in Haiti, from the mid-1980s to the present day, in order to contribute to an understanding of the recent past, but above all of the present and future prospects.

Keywords: Social movement; citizenship; governance; State; social mobilization.